

## **El acceso a la justicia. Funciones respecto de los sujetos materiales.**

### **Estándares adecuados. Concreciones legales.**

El acceso a la justicia es entendido como principio fundamental debido a la necesidad de desarrollar un derecho fundamental como la seguridad jurídica<sup>1</sup>, por lo cual es menester que los justiciables puedan acceder a los órganos de tutela de sus derechos, para que estos puedan pronunciarse sobre las peticiones de aquéllos. La tutela de los derechos, en este caso se entiende estrictamente ceñida al conocimiento de los tribunales de justicia sobre el fondo del asunto, de tal manera que el principio obliga a resguardar el derecho de las víctimas a que los casos en los cuales dicen haber sido afectadas en algún derecho sean del conocimiento de un juez, nótese que en este caso la garantía no se reduce a la decisión de la autoridad requirente, es decir de la fiscalía, por cuanto no es a dicho órgano a quien le esta confiado por la Constitución la potestad de juzgar, en tal sentido el principio se colma cuando la víctima tiene la posibilidad de llevar su caso a la jurisdicción para que la misma decida sobre sus pretensiones<sup>2</sup>.

Una regla especial que permite garantizar en alguna medida (por su modificación posterior) el acceso a la justicia, es la regla obligatoria de conversión de la acción penal pública en privada, sólo que la configuración ulterior de los casos de procedencia limitó bastante la idea originaria de la norma, en el sentido de potenciar la persecución penal por parte de la víctima, cuando agotado un plazo determinado el fiscal no presentaba requerimiento. En la versión actual, la figura se encuentra más limitada, empero en los casos donde se determine alguna dificultad interpretativa, habrá de resolverse conforme al fin del principio aludido, es decir resguardando el acceso a la justicia por parte de la víctima.

---

<sup>1</sup> Para apreciar la relación entre seguridad jurídica desde una perspectiva subjetiva con énfasis en la prohibición de la arbitrariedad. Ver Sentencia de la Sala de lo Constitucional en proceso de Amparo del diecinueve de marzo de 2001 Ref. Amp 305-99 Considerando II 2.

<sup>2</sup> Ciertamente la cuestión no es baladí, el derecho de garantizar a las víctimas un mecanismo de acceso rápido y efectivo para la tutela de sus intereses, es reconocido a nivel de un derecho humano lo cual implica una serie de obligaciones del Estado para satisfacer el mismo. Ver MELÉNDEZ Florentín “Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos aplicables a la administración de justicia” Op. cit. p 60.

Como expresión inmediata de lo anterior, se desarrolla un sistema de control ante las denuncias interpuestas en sede fiscal, aunque debe afirmarse que el control en este caso se agota en esa sede administrativa, la denegatoria de requerir daría lugar al control de la justicia constitucional mediante el amparo, con la asunción de responsabilidades para el funcionario que no ha cumplido con sus deberes.

Otra expresión de este principio de acceso a la justicia, se encuentra en la facultad de la víctima de querellar (art. 107) la cual puede ser por ofensas a sus propios bienes jurídicos, o por injurias a bienes de carácter colectivo (art. 107 inciso final) con lo cual se reconoce la llamada querella o acusación popular, se permite tanto la querella adhesiva, como la conjunta, en este último caso deducida la pretensión penal, el querellante puede proseguirla aunque el ministerio fiscal no decida continuarla (363 CPP).

Por ultimo, una cuestión importante es que el acceso a la justicia tenga una dimensión de celeridad, por esta vía se permite tutelar aquellos casos en los cuales, se produzca una demora injustificada para la resolución de la causa, los estándares reconocidos en estos casos son los tradicionales, y se admiten únicamente las demoras que tienen un grado de justificación.

### **La publicidad como principio rector. Excepciones legales.**

La publicidad es un aspecto fundamental del proceso penal<sup>3</sup>, y con mayor de énfasis del juicio oral, inclusive entre nosotros, la Constitución de la República establece como una garantía fundamental, el derecho a un juicio público, según lo preceptuado en el artículo 12; estas mismas exigencias están planteadas en el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los artículos 14.1 y 8.5 respectivamente.

No obstante la garantía a un juicio celebrado públicamente, ésta no es absoluta y bajo ciertos supuestos puede ser limitada, por lo que se consideran las causas de restricción a la celebración del juicio público, en todo caso se trata de la llamada

---

<sup>3</sup> En relación a los aspectos generales de la publicidad Ver LÓPEZ ORTEGA Juan José en CASADO PÉREZ José María y otros “Código Procesal Penal Comentado” Tomo II. Primera edición. Corte Suprema de Justicia AECI-PNUD. San Salvador. El Salvador. 2001 pp. 160 a 164

publicidad, externa, pero nunca de la publicidad interna, por cuanto la reserva no implica limitaciones para los sujetos procesales tanto materiales como formales, aunque la intermediación de la prueba pueda sufrir ciertas modificaciones, pero manteniendo en todo caso el núcleo esencial del derecho de confrontación como expresión del derecho de defensa.

Los aspectos anteriores se ven limitados por el reconocimiento de otros derechos fundamentales, en este caso se encuentran vinculados directamente a los derechos de las víctimas y sobre todo de aquellas que son menores de edad (artículos 106 N° 10 y 11); lo cual también modifica de manera esencial la forma de configuración del recibo de los testimonios de los menores, artículo 213 CPP.

Se reconocen causas expresas de la reducción de la garantía de publicidad en el proceso, tanto en la fase instructoria (artículo 307) como en la del plenario (artículo 369). Ellas son la moral pública, la intimidad, la seguridad nacional, el orden público o la previsión de normas específicas.

En cuanto a la moral pública, aunque es un concepto complejo, el mismo se mantiene en supuestos de instrumentos internacionales, por lo cual su admisión resulta razonable, la exigencia del carácter público de la moral, limita ya el ámbito de aplicación, usualmente se vincula la moral pública a una que trasciende la visión meramente personal del ser humano, es decir que no se trata de la regulación del comportamiento humano en un sentido intrínseco, sino vinculado a una clave valorativa común, es por ello que se ha optado por utilizar un concepto que usual en los instrumentos internacionales.

Se reconoce como un nuevo supuesto la intimidad, en este aspecto debe indicarse el carácter fundamental de tal derecho, y por el mismo es posible considerar: aquellos ámbitos de privacidad en los cuales el titular no desea que los mismos se encuentren expuestos a otras personas, siendo la intimidad no sólo un derecho fundamental, sino un derecho humano, el mismo debe encontrar una protección distinta en el marco del proceso penal, de ahí que la ponderación entre intimidad y otros derechos o garantías que se desarrollen a partir del proceso penal debe ser decidida ponderativamente en atención al caso particular.

En cuanto al concepto de interés público, el mismo se ha modificado en la actual legislación, por lo impropio del concepto para generar una excepción a la publicidad, por cuanto en razón de dicho interés, el juicio al contrario debería ser público y no reservado, por cuanto el interés público se entiende como las potestades administrativas que justifican las actuaciones de la administración pública; la idea es la de mantener un interés general que priva sobre el interés particular; pero en tal caso, la idea de reserva perdería consistencia. Es por esa razón que preferimos usar el término que emplea el mismo Pacto Internacional, el cual también se utilizaba en el código anterior, que es el concepto de orden público entendiendo por tal: “Conjunto de condiciones fundamentales de vida social instituidas en una comunidad jurídica, las cuales por afectar centralmente a la organización de ésta, no puede ser alteradas por la voluntad de los individuos, ni en su caso por la aplicación de normas extranjeras”.

Las previsiones a normas específicas deben ser consideradas en una doble dimensión, las que se encuentran previstas en un ámbito de mayor expansión como lo serán los tratados internacionales<sup>4</sup> incorporados como leyes en la República y que tenga previstas limitaciones especiales sobre la publicidad de los juicios, y los reconocidos en otras leyes. Aunque debe recordarse que la ponderación entre publicidad del procedimiento y limitaciones deben decidirse casuísticamente, sobre todo en el juicio o en actos vinculados a esa actividad por el rango constitucional de publicidad que se reconoce al principio.

---

---

<sup>4</sup> A modo de ejemplo pueden tenerse en cuenta las previsiones que se han citado en los instrumentos internacionales referidos a las declaraciones de los menores.

---